

FOREIGN AFFAIRS LATINOAMÉRICA

VOLUMEN 10 • NÚMERO 1
ENERO-MARZO DE 2010

Alianzas externas para armamento y defensa

Una nueva dimensión en la agenda
de seguridad latinoamericana

Daniel Flemes y Detlef Nolte

Alianzas externas para armamento y defensa

Una nueva dimensión en la agenda de seguridad latinoamericana

Daniel Flemes y Detlef Nolte



INTRODUCCIÓN

EN JULIO DE 2009, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) advirtió que los gastos de defensa en Latinoamérica habían crecido en más de 90% entre 2003 y 2008, esto es, de 24 700 millones a 47 200 millones de dólares. Por ejemplo, a comienzos de septiembre de 2009, Brasil y Francia cerraron un acuerdo de cooperación de largo plazo en industrias de armas. Venezuela dio a conocer casi al mismo tiempo una generosa compra de armas a Rusia. Poco antes, Colombia había concluido un acuerdo con Estados Unidos que otorga a las tropas estadounidenses el derecho de usar siete bases militares colombianas por un período de 10 años; esto ha generado tensiones entre Colombia y Venezuela en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Asimismo, en la prensa internacional se han acumulado titulares sobre la espiral armamentista y sobre el creciente riesgo de que se presenten conflictos en la región.

DANIEL FLEMES es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) del German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo, Alemania. Trabaja sobre temas de Sudamérica, principalmente sobre Brasil y Venezuela. DETLEF NOLTE es Vicepresidente del GIGA y Director del ILAS. También es profesor de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Hamburgo.

Por otro lado, en los últimos años, el aumento de la exportación de materias primas en Latinoamérica ha generado los recursos necesarios para la compra de armamento, en parte, para modernizar el armamento obsoleto y como consecuencia de los realineamientos de las políticas exteriores y de las fuerzas armadas de la región. Como resultado del trasfondo ideológico de la política exterior de algunos países de la región, la compra de armamento podría agravar los conflictos latentes (hasta ahora limitados a ataques verbales y a operaciones militares encubiertas), a pesar de que es poco probable que ocurran guerras abiertas entre los Estados de Latinoamérica.

Tanto las alianzas estratégicas de los países sudamericanos con actores extrarregionales —por ejemplo, la de Venezuela con Rusia, o la de Brasil con Francia— como la creciente presencia de Estados Unidos en Sudamérica —por ejemplo, con la utilización de bases militares en Colombia y la reactivación de la 4ª Flota— son fenómenos relativamente nuevos. La carrera armamentista y las alianzas con actores externos afectan negativamente el proceso de integración en Sudamérica y entorpecen las aspiraciones de Brasil de demarcar y consolidar su zona de influencia. Por otra parte, la política armamentista de Venezuela y el estacionamiento de fuerzas militares estadounidenses en Colombia amenazan la unidad sudamericana y ponen en peligro la cooperación regional en materia de defensa.

CONFLICTOS ENTRE ESTADOS:
RESENTIMIENTOS HISTÓRICOS E IDEOLÓGICOS

LOS TEMAS DE LOS GASTOS MILITARES y de las políticas de seguridad en Latinoamérica reciben cada vez mayor atención en la prensa. El periódico estadounidense *El Nuevo Herald* criticó en su editorial del 12 de septiembre de 2009 el aumento de los gastos en armamento en Latinoamérica, a pesar de la crisis económica. El periódico español *El País* publicó el 28 de agosto de 2009 una nota titulada “Suramérica refuerza sus arsenales”. ¿Cómo se percibe la seguridad regional en América Latina? ¿Cómo se debe interpretar el creciente gasto en armamento?

A primera vista, y en comparación con otras regiones, Latinoamérica es una región pacífica: según datos del Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo (SIPRI), durante la década de los noventa sólo hubo cuatro conflictos entre los Estados de la región. Durante el mismo período, se registraron dieciséis conflictos en África, nueve en Asia, nueve en Medio Oriente y ocho en Europa. Sin embargo, a causa de las delimitaciones territoriales fijadas en los tiempos coloniales, que no eran siempre claras, prevalecieron en Latinoamérica varios conflictos latentes; muchos de ellos, principalmente entre Chile y Argentina, pudieron solucionarse en los años noventa, en el marco del proceso de integración regional. El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de Heidelberg (IIIK), en su “Barómetro de conflictos”, solamente enumera siete conflictos territoriales persistentes en Latinoamérica en 2008, aparte del conflicto entre Argentina y

Reino Unido por las Islas Malvinas. Según otros cálculos, todavía existen unos 36 conflictos fronterizos sin solucionar en los que participan países latinoamericanos.

En 1995, aún había escaramuzas en los territorios fronterizos entre Ecuador y Perú, así como conflictos por la delimitación de fronteras en Centroamérica; también por las fronteras marítimas entre Honduras, Nicaragua y El Salvador; por la demarcación fronteriza entre Guatemala y Belice; por el límite en el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica; por la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia y dos islas en el Caribe; por las islas Los Monjes, entre Venezuela y Colombia, así como pugnas territoriales entre Guyana y Surinam, y entre Guyana y Venezuela. Casi todos estos conflictos se resolvieron a través de procesos de conciliación y de arbitraje internacional.

La Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que se enfrentaron Chile, Bolivia y Perú, sigue teniendo repercusiones en la actualidad. En esa guerra, Chile se anexó grandes extensiones de territorio, y en consecuencia, Bolivia perdió su salida al mar. Desde entonces, la recuperación de una salida al océano Pacífico es uno de los temas más importantes de la política exterior boliviana. Entre Perú y Chile, la demarcación de la frontera marítima aún no está acordada. De hecho, Perú llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, en octubre de 2009, Chile llevó a cabo el ejercicio militar “Salitre 2009”, cerca de la frontera con Perú. El ejercicio planteaba inicialmente que las fuerzas armadas de Chile debían replegar a Tarapacá, un país ficticio que había invadido el territorio chileno y se negaba a abandonarlo a pesar de la orden de Naciones Unidas. Tarapacá fue uno de los territorios peruanos que quedó en manos chilenas después de la Guerra del Pacífico. Solamente después de fuertes críticas del gobierno peruano, Chile rediseñó el ejercicio, que contó con la participación de tropas de Argentina, de Brasil, de Francia y de Estados Unidos.

Los conflictos internos de los Estados latinoamericanos también han afectado a países vecinos, como sucedió con las guerras civiles en Centroamérica de los setenta y de los ochenta. El potencial de desestabilización regional de los conflictos y de las crisis internas sigue vigente. En los últimos años, los enfrentamientos armados en Colombia han cobrado un carácter internacional y más ideológico. Estados Unidos apoya considerablemente a Colombia con armas y capacitación militar en el marco del Plan Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que, en gran parte, han degenerado en una organización criminal— usan a países vecinos, como Ecuador y Venezuela, como zonas de retirada. Por otra parte, Hugo Chávez ha mostrado públicamente su simpatía hacia las FARC. El 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano incursionó en territorio ecuatoriano para atacar una base de las FARC, lo que provocó la muerte de un alto jefe de esta organización. La violación de la frontera ecuatoriana por parte del ejército colombiano generó graves tensiones diplomáticas, y Ecuador y Venezuela movilizaron sus tropas hacia las fronteras con Colombia. En la resolución de este conflicto no sólo participó la Organización de los Estados Americanos

(OEA), sino también el Grupo de Río. Sin embargo, las relaciones entre los países involucrados permanecen paralizadas.

EL GASTO EN DEFENSA Y LAS POLÍTICAS
ARMAMENTISTAS EN LATINOAMÉRICA

EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA, casi todos los países latinoamericanos redujeron el número de sus efectivos militares, especialmente en Centroamérica, donde las guerras civiles llegaron a su fin. Por el contrario, en la primera década del siglo XXI, los efectivos militares han aumentado en varios países la región. Especialmente notorio es el caso de Colombia, en donde el gobierno aspira a una solución armada al conflicto con las FARC. También ha habido un aumento del personal militar en México, en Brasil y en Venezuela.

Mientras que los gastos militares en los años ochenta y noventa se estancaron o incluso disminuyeron, desde el comienzo de esta década ha habido un crecimiento del gasto en defensa. Este aumento en el gasto militar ha ido a la par del crecimiento económico y del aumento de los recursos generados por las exportaciones de materias primas. En relación con el PIB, la proporción correspondiente al gasto en defensa no se incrementó. En Brasil, esta proporción en 2007 era del 1.5% (en comparación con el 4% de Estados Unidos). Destaca el caso de Chile que, con 3.4%, supera por mucho a los gastos de defensa de Argentina, que representan el 0.8% de su PIB. En Venezuela, el gasto en defensa representa el 1.3% del PIB. Los gastos en defensa de Colombia y Ecuador son considerablemente elevados, pues representan el 11% y el 9%, respectivamente, de los presupuestos de sus gobiernos. Por otra parte, el gasto en defensa de México es notablemente bajo (el 0.4% del PIB en 2007), lo que podría explicarse como una consecuencia de que este país se encuentra bajo abrigo de la seguridad estadounidense.

En Latinoamérica, dos terceras partes del gasto militar se invierte en personal, incluido el gasto en pensiones, mientras que el resto se destina a la compra de equipos y de armamento. Casi todos los nuevos sistemas de armas son importados: Rusia se ha posicionado como el mayor exportador de armas en Sudamérica, seguido de Estados Unidos. Alemania, debajo de estos dos países por una larga distancia, es el mayor exportador europeo de armas en la región.

Asimismo, el gobierno brasileño se ha mostrado interesado en ampliar su industria de defensa. Los aviones Tucano y Súper Tucano, utilizados por Colombia en el ataque al campamento militar de las FARC en Ecuador, eran de manufactura brasileña. La fuerza aérea ecuatoriana también solicitó 24 aviones de este tipo. Asimismo, Chile y Argentina han intentado establecer industrias nacionales de armamento capaces de abastecer al mercado latinoamericano.

Tradicionalmente, Brasil ha sido el país con el mayor arsenal de Latinoamérica. Con mucha distancia le sigue Colombia, que ha sido azotada por la violencia de sus conflictos internos. Otros países más rezagados han avanzado claramente en

los últimos años. En especial, las fuerzas armadas de Chile han dejado en claro su capacidad en las áreas de defensa terrestre y control de crisis en el marco de las misiones de paz de Naciones Unidas. El potencial de Chile en tierra y aire, después de concluir la renovación de su flota aérea y de sus tanques, podría incluso alcanzar a Brasil en estos rubros. Venezuela, con fuerzas militares de bajo nivel, ha invertido considerablemente en su capacidad militar. Por último, se estima que Bolivia y Paraguay permanecerán, junto a los países de Centroamérica y el Caribe, con un poder militar reducido.

ALIANZAS EXTERNAS:
ARMAMENTO Y COOPERACIÓN MILITAR

LAS CRECIENTES COMPRAS DE ARMAS por parte de países que ocupan una posición intermedia en el escalafón de poder sudamericano, como Chile y Venezuela, han puesto a prueba el dominio militar de Brasil. En este contexto, Brasil presentó una nueva estrategia de defensa en diciembre de 2008, que apunta hacia la expansión de su potencial militar y, con ello, a la consolidación de su papel como potencia regional. Los pilares de esta estrategia —el aumento del armamento, las políticas de disuasión y la proyección de poder— reflejan la gran influencia de las fuerzas armadas en la política de defensa de Brasil.

Mientras que Brasil escogió una alianza con Francia para el desarrollo de su potencial militar, Venezuela prefirió a Rusia, y Colombia se inclinó por Estados Unidos. Por el contrario, Chile ha diversificado el abastecimiento de su equipo militar con compras a Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, España y el Reino Unido, y ha evitado mezclar las importaciones de armamento con las alianzas bilaterales en el ámbito político. Al importar sus armas de países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Chile asegura el alto nivel tecnológico de su arsenal.

La necesidad de modernizar las fuerzas armadas de los países sudamericanos es innegable, y la integración de las fuerzas por medio de una mayor interoperabilidad y de operaciones conjuntas sigue siendo una tarea pendiente. Hoy en día, en algunos países pequeños, siguen en uso equipos y armas que en otros países ya son obsoletos. Por este motivo, y gracias a los ingresos por las exportaciones de materias primas (petróleo, gas natural, cobre, etcétera), se han podido financiar las compras de armas y se puede explicar, en parte, la acelerada dinámica de los gastos en defensa de los últimos años.

Esta situación ha contribuido a la profundización de los conflictos entre los países de la región, y explica las relaciones diplomáticas tensas, su ruptura en algunos casos y la movilización de tropas en las fronteras. Estos conflictos se caracterizan por tener un alto contenido histórico, como en el caso de Chile, Perú y Bolivia, e ideológico, como en el caso de Venezuela, Ecuador y Colombia. Además, son explotados con frecuencia por políticos y líderes populistas para desviar la

atención de problemas internos. Los acuerdos militares y de defensa con potencias extrarregionales terminan por sumarle una dimensión externa a la ya compleja agenda de seguridad regional.

Desde la década de los noventa, Brasil ha encabezado la cooperación regional en seguridad, después de haber descartado la posibilidad de un conflicto militar con los países vecinos. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) ha servido como semilla de una política de defensa regional que no ha crecido todo lo esperado. Los intentos del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur a lo largo de 2008 y de 2009 para coordinar las estrategias de defensa y lograr una agenda de seguridad común han sido hasta ahora poco exitosos, debido a la renuencia de Colombia a integrarse en una política de defensa común. El acuerdo sobre las bases militares que Estados Unidos usará en Colombia ha sido rechazado por otros países sudamericanos, ya que contradice el objetivo de que las políticas de defensa del subcontinente sean un asunto meramente sudamericano. De esta forma, las alianzas con potencias externas ponen en peligro el futuro de la cooperación sudamericana para la defensa.

ALIANZA DE ARMAMENTO ENTRE BRASIL Y FRANCIA

EN DICIEMBRE DE 2008, Nicolas Sarkozy y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva cerraron una alianza estratégica entre sus países. También concertaron posiciones para reformar el sistema global financiero y proteger el medio ambiente. Además, el presidente Sarkozy confirmó el apoyo a Brasil para que obtenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero el contenido clave de dicha alianza estratégica es el sector del armamento y de la tecnología militar. Se espera que Helibras, una filial de Eurocopter en Itabujá, en el estado de Minas Gerais, fabrique helicópteros EC-725 Cougar. El traspaso de la tecnología necesaria para este proyecto está regulado en un contrato de aproximadamente 2 700 millones de dólares, en el que además se estipula que Brasil adquirirá 51 helicópteros de guerra y transporte. Por otra parte, en septiembre de 2009, durante la licitación de un gran contrato de la fuerza aérea para la fabricación de 36 aviones de caza, con un valor de 7 000 millones de dólares, el presidente Lula mencionó que el modelo francés de Dassault Rafale tenía una “ventaja comparativa”. Al contrario del competidor estadounidense Boeing y del sueco Saab, los franceses aceptaron el traspaso de tecnología desde el comienzo de las negociaciones. Ya en 2005, Brasil había comprado doce aviones de transporte de tipo C-295 a la European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). En el futuro se espera otra compra de cincuenta aviones tipo C-212. Para este fin está planeada la construcción de una línea de montaje en Brasil.

Otro de los negocios franco-brasileños de armamento es la compra de Brasil de submarinos franceses por un valor de 6 000 millones de dólares. Hasta 2018, se tiene prevista la construcción de cinco submarinos de clase Scorpène y la transferencia

de la tecnología correspondiente. Para el montaje de los submarinos, Francia está financiando un astillero que después de 20 años pasará a manos del gobierno brasileño. Uno de los submarinos por fabricarse será de tipo nuclear, debido a que la armada brasileña está interesada en desarrollar la propulsión nuclear por sí misma. En otra parte del contrato, se estipula la construcción de una base marina adecuada para la flota de submarinos, con asesoramiento francés. Además, existe un prestigioso proyecto que se inició hace 30 años para desarrollar un submarino nuclear en el centro de investigación de las fuerzas navales brasileñas, Aramar. Se estima que faltan por lo menos 10 años más para alcanzar dicho objetivo. En este mismo centro de investigación, se desarrolló la tecnología que permitió que Brasil se convirtiera, en 2006, en el noveno país del mundo en controlar el ciclo nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio.

La mayoría de las inversiones brasileñas en armamento están dedicadas al desarrollo de las fuerzas navales para garantizar la seguridad de las aguas costeras. Las demandas de modernización de la armada brasileña, después de ser ignoradas durante varios años, adquirieron mayor importancia desde que fueron descubiertos los inmensos yacimientos de petróleo en la zona económica exclusiva de la costa atlántica. La rápida sucesión de hechos desde comienzos de 2008 dejó en claro hacia quién está dirigida la nueva política armamentista y de disuasión de Brasil. Poco después de que Brasil descubriera el segundo yacimiento de petróleo en el Atlántico sur, el gobierno estadounidense dio a conocer la reactivación de la 4ª Flota, que sería puesta en operación en aguas latinoamericanas después de 58 años fuera de servicio. En reacción a este anuncio, en septiembre de 2008, la armada brasileña llevó a cabo, junto a unidades de la fuerza aérea y del ejército, un ejercicio militar con el nombre de *Operação Atlântico*, en el que veinte barcos de guerra, cuarenta aviones de combate y más de 10 000 soldados realizaron maniobras de simulación durante 2 semanas. Específicamente, se planteó un escenario de guerra en el que dos países luchaban por el control de los yacimientos de petróleo en aguas brasileñas.

EL EJE CARACAS-MOSCÚ

VENEZUELA SE HA CONVERTIDO en un socio estratégico de Rusia en el sector de armamento. Desde 2005, Moscú y Caracas han cerrado contratos con un valor de 5 000 millones de dólares, que en gran parte están cubiertos con cláusulas de no proliferación del armamento. Venezuela ha adquirido un número importante de lanzamisiles y de lanzagranadas, 100 000 fusiles de asalto (AK-103) y la transferencia de tecnología necesaria para producirlos. A pesar de las cláusulas de no proliferación, se han encontrado fusiles y lanzagranadas venezolanos en manos de las FARC en Colombia.

Por otra parte, las fuerzas armadas venezolanas le han comprado a Rusia 55 helicópteros de combate y transporte (modelos MI-17V5, MI-35 y MI-26), veintinueve aviones de combate (Sukhoi SU-30), un avión Ilyushin II-96 y veinte buques

de guerra. En su último viaje a Rusia, Hugo Chávez encargó 92 tanques modelo T-72, así como misiles antiaéreos con un alcance máximo de 90 kilómetros. Con todo esto, Venezuela es el más grande comprador de armas de fabricación rusa en toda Latinoamérica.

También vale la pena recordar que el Presidente del país más pobre de Sudamérica y el más leal seguidor de Chávez, Evo Morales, solicitó a Rusia en agosto de 2009 un crédito con un valor de 100 millones de dólares para la adquisición de armamento. Ecuador, por su parte, concertó recientemente con Rusia la compra de helicópteros NI para el transporte de tropas. Además, según Javier Ponce, Ministro de Defensa de Ecuador, se tiene prevista la compra de seis aviones no tripulados rusos. Las compras de armas rusas por parte de Venezuela, Bolivia y Ecuador consolidan sus alianzas políticas y a su vez refuerzan el otro polo ideológico de la región, liderado por Estados Unidos.

Las compras venezolanas de armas se financiaron a través de créditos y por medio de negocios compensatorios. De esta manera, se abrieron sectores estratégicos —gas natural, petróleo y la extracción de bauxita y de oro— de la economía venezolana a inversionistas rusos. Desde el año pasado, Venezuela también ha declarado su interés por construir una planta nuclear con asesoría rusa. Según la información existente, el trabajo en conjunto se limitará al uso civil de energía nuclear y no está prevista la transferencia de tecnología de uso dual de enriquecimiento de uranio. En su última visita a Rusia, en septiembre de 2009, el presidente Chávez aseguró su intención de usar la tecnología nuclear solamente con fines pacíficos. En ese viaje, Chávez también visitó Teherán, donde se reunió con su homólogo Mahmud Ahmadineyad, que en los últimos años ha desplegado una política exterior basada en la defensa de un programa de energía nuclear, destinado a usos civiles, según las autoridades iraníes.

Sería mera especulación afirmar que Chávez está aspirando a construir armas nucleares. Sin embargo, si ése fuera su objetivo, Venezuela necesitaría muchos años para desarrollar las tecnologías de enriquecimiento de uranio con fines militares y de misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Hasta ahora no se ha visto ningún paso concreto en esa dirección.

La cooperación entre Venezuela y Rusia también abarca la realización de ejercicios militares conjuntos. En septiembre de 2008, dos bombarderos estratégicos TU-160 de la fuerza aérea rusa aterrizaron en Venezuela. Pocos meses después, se llevaron a cabo maniobras conjuntas en el Caribe, en las que participaron fuerzas venezolanas, y, por parte de Rusia, cuatro buques de guerra —entre ellos, el crucero nuclear Pedro el Grande— y un buque antisubmarinos. Este llamativo ejercicio ruso-venezolano en el Caribe se puede interpretar como una respuesta a la presencia de fuerzas navales estadounidenses en el mar Negro durante el enfrentamiento entre Rusia y Georgia en verano de 2008, y también como una respuesta a los planes estadounidenses —recientemente abandonados— de colocar un escudo antimisiles en Europa oriental.

Por otra parte, existe un conflicto político e ideológico entre Venezuela y Estados Unidos. Chávez asegura que Washington participó en el intento de golpe de Estado en su contra en 2002, y que durante la operación del ejército colombiano en Ecuador, en 2008, Estados Unidos prestó ayuda logística al gobierno de Colombia. Además, Venezuela compite con Brasil por la hegemonía militar en Sudamérica. La alianza armamentista entre Moscú y Caracas también puede interpretarse como un intento venezolano de mantenerse cerca de la supremacía militar de Brasil en el subcontinente. Sin embargo, si se comparan las adquisiciones de armas de Chile y de Venezuela (por ejemplo, los aviones Sukhoi y los tanques T-72 rusos comprados por Venezuela, en contraste con los aviones estadounidenses F-16 y los tanques alemanes Leopard II adquiridos por Chile), queda claro que Caracas, aun contando con los sistemas de armas desarrollados en Rusia y en la antigua Unión Soviética, está atrasada en tecnología, por lo menos por una generación.

COOPERACIÓN MILITAR ENTRE BOGOTÁ Y WASHINGTON

EL PRESIDENTE COLOMBIANO ÁLVARO URIBE concluyó recientemente un acuerdo con Estados Unidos en el que se les permite a las tropas estadounidenses el uso de bases militares colombianas. Por un período de 10 años, el personal militar —los llamados “consejeros civiles”— y otros equipos especializados podrán operar en siete bases militares de Colombia. El comando de las bases estará formalmente en manos colombianas. La información oficial hasta ahora disponible revela que, en una primera instancia, se estacionarán aviones AWACS con el propósito de vigilar las actividades del narcotráfico, incluidas las actividades de la guerrilla relacionadas con el tráfico de drogas.

Colombia tendrá acceso a la información que obtengan los militares estadounidenses en las bases. También se harán inversiones para la modernización de las bases. Sólo la modernización de la base de Palanquero tendrá un costo cercano a los 50 millones de dólares. Al mismo tiempo, se mantendrá la ayuda militar en el marco del Plan Colombia, que en 2008 representaba un monto cercano a los 500 millones de dólares. Se espera que el acuerdo sobre el uso de las bases militares también facilite la ratificación del Congreso estadounidense del tratado de libre comercio entre ambos países.

El gobierno de Estados Unidos tiene un interés claro en la contención de la producción de cocaína, cuyo principal destino es su país. Además, Estados Unidos tiene un interés estratégico en mantener su presencia y su influencia histórica en Sudamérica. En 2009, expiró el acuerdo que le daba el derecho a usar la base militar de Manta, en Ecuador, ya que éste no fue renovado por el gobierno del presidente Rafael Correa, quien ha acercado a su país a la propuesta ideológica de Chávez al unirse a la iniciativa de integración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

¿CONSOLIDACIÓN MILITAR DE LAS ALIANZAS POLÍTICAS?

CON EL AUMENTO DE LA PRESENCIA de Estados Unidos en Colombia, el gobierno de Uribe parece consolidar su papel de un *outsider* en Sudamérica. Desde hace unos años, Colombia se mueve al margen de las dinámicas de integración sudamericanas. El único amigo que aún tiene el gobierno de Uribe, el gobierno de Perú encabezado por el también conservador y económicamente liberal Alan García, parece estar de acuerdo con la presencia estadounidense en las bases militares de Colombia. Como era de esperarse, Venezuela, Bolivia y Ecuador han rechazado tajantemente esta situación. Sin embargo, Colombia no fue juzgada claramente dentro de la Unasur, debido a que los gobiernos moderados y conciliadores del Cono Sur recordaron los principios de soberanía nacional y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

La declaración final de la cumbre extraordinaria de la Unasur, celebrada en Bariloche en agosto 2009, fue conciliadora. La declaración advierte de que la presencia de tropas extranjeras en los países de la región —refiriéndose a las tropas estadounidenses— no debe representar una amenaza para la paz y la seguridad de la región, pero al mismo tiempo señala que los grupos armados, el terrorismo transnacional, el crimen organizado y el tráfico de drogas son desafíos comunes para toda la región. Una reunión posterior de Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores en el marco del Consejo de Defensa Suramericano, en Quito en septiembre de 2009, también resultó infructuosa. Colombia se negó a dar a conocer a los demás países sudamericanos los detalles de su acuerdo con Estados Unidos y, en cambio, se dedicó a criticar las compras de armas que hacen los otros países de la región. Al verse arrinconado, el gobierno colombiano amenazó indirectamente con retirarse de la Unasur. No obstante, el papel conciliador del presidente Lula no cambia el hecho de que Brasil y Venezuela (junto con sus socios estratégicos Francia y Rusia, respectivamente), además de los gobiernos de Argentina y Chile, estén unidos en su aspiración de limitar la influencia de Estados Unidos sobre la política de seguridad regional. De esta manera, no es ningún misterio que cuando Brasil, en su estrategia de defensa nacional, menciona la amenaza que representa “una gran potencia militar”, se refiera indirectamente a Estados Unidos.

El Presidente peruano, Alan García, criticó en la reunión de Quito el “vergonzoso” gasto en armamento de los países sudamericanos, y propuso un pacto de no agresión en el marco de la Unasur con el doble propósito de detener la carrera armamentista en la región y promover la transparencia de los gastos militares. El gobierno chileno se sintió directamente aludido por la propuesta peruana y negó la existencia de una carrera armamentista. El Ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, rechazó la petición y afirmó que el lenguaje de un “pacto de no agresión militar” era propio de un “clima bélico” que, a su consideración, no existe en la región. Al mismo tiempo, se mostró de acuerdo con la propuesta del mandatario peruano de transparentar los gastos militares y recordó, irónicamente, que Chile había hecho una propuesta similar a Perú, pero que todavía

estaba esperando una respuesta. La propuesta de Chile a Perú consistió en seguir el modelo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la homologación de gastos en defensa que se usa exitosamente con Argentina.

La última reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Unasur tuvo lugar en noviembre de 2009 en Quito. En la resolución final de la reunión se reitera la proscripción del uso o la amenaza del uso de la fuerza entre los Estados miembros de la Unasur. Respecto al uso de las bases militares colombianas por parte de tropas estadounidenses, en la resolución se afirma que los acuerdos militares de los Estados miembros de la Unasur tendrán siempre que incluir una cláusula explícita que asegure el respeto a los principios de la igualdad soberana, de la integridad e inviolabilidad territorial y de la no intervención en asuntos internos. En la misma reunión, se le asignó al Consejo de Defensa Suramericano la tarea de desarrollar un mecanismo para la notificación y el registro de los acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad. Además, se acordó que el mismo Consejo tendrá la responsabilidad de crear un registro regional de compras de armas y de establecer mecanismos para aumentar la transparencia de los gastos militares.

REFLEXIÓN FINAL

EN LATINOAMÉRICA, el riesgo de un conflicto armado entre dos o más Estados es bajo. Sin embargo, no se puede descartar del todo que en el futuro se presenten acciones militares en zonas fronterizas —como el ataque colombiano a una base de las FARC en Ecuador— que pudieran transformarse en conflictos más graves. Existe también el riesgo de que los políticos populistas se queden atrapados en su propia retórica y caigan en la tentación de probar el nuevo armamento que han adquirido. Desde hace unos años, las tendencias de política exterior de algunos países, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han adquirido un fuerte carácter ideológico que agudiza la tensión y el resentimiento entre los países de la región. Además, las disputas territoriales que llevan un largo tiempo sin resolverse y otros factores, como las alianzas armamentistas y militares con potencias extrarregionales, obstaculizan la cooperación en defensa y en seguridad entre los Estados sudamericanos. Y por si esto fuera poco, las aspiraciones militares y las rivalidades ideológicas impiden que las verdaderas amenazas a la seguridad regional reciban la debida atención para entablar una cooperación regional exitosa.

Los gobiernos sudamericanos parecen estar de acuerdo en que las amenazas transnacionales de carácter no militar son los desafíos prioritarios de la seguridad regional. Desde hace mucho tiempo han surgido en la región distintas formas del crimen organizado, como el tráfico ilegal de drogas y de armas, pero su creciente transnacionalización representa nuevos desafíos, ya que muchas veces el crimen organizado debe ser combatido por policías ineficientes, profundamente corruptas y que operan con escasos recursos. Estos desafíos no se pueden enfrentar de forma adecuada con tanques y con submarinos. Por otra parte, los crecientes gastos en

armamento agudizan la falta de inversión en temas de la agenda social y educativa, lo que en el largo plazo pone en vilo los mismos fundamentos sociales de los países de la región. Estos problemas deben ser atendidos por los países de Sudamérica, pues algunos gobiernos, como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, fueron elegidos porque una buena parte de sus ciudadanos habían sido excluidos, durante décadas, de la participación política y marginados del desarrollo económico de sus países. 